PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, A COMPARECER CON CARÁCTER URGENTE ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EFECTOS DE OFRECER EXPLICACIONES SOBRE EL CASO DE ESPIONAJE ILEGAL; A LA PGR A INVESTIGAR, ESCLARECER Y, EN SU CASO, A SANCIONAR LOS CASOS DE ESPIONAJE ILEGAL, A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A ATENDER LAS QUEJAS QUE LE HA TRASLADADO LA CIDH Y A QUE SE COORDINE CON LA PGR PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS INTERNACIONALES POR PRESUNTO ESPIONAJE CONTRA AUTORIDADES DIPLOMATICAS

Araceli Damián, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente Proposición con Punto de acuerdo, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El 11 de febrero de 2017 el Laboratorio Ciudadano (*The Citizen Lab*) de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, denunció públicamente los reiterados intentos de espionaje¹ contra el Dr. Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; Luis Manuel Encarnación, director de la coalición ContraPESO. La institución canadiense concluye en su informe que estas tres personas —ampliamente reconocidas por su activismo a favor del impuesto a productos de alto contenido calórico— fueron los objetivos claros y premeditados de diversos intentos de violación de su privacidad mediante ataques electrónicos a sus dispositivos móviles a través del uso del programa de espionaje *Pegasus*, elaborado por la empresa de seguridad de origen israelí *NSO Group*.

SEGUNDA.- El 29 de junio de 2016 la Alianza por la Salud Alimentaria inició una campaña con el objetivo de modificar las normas sobre etiquetado de alimentos procesados y para orientar, al público en general, en el consumo de alimentos mediante una aplicación para móviles que indique si los niveles de azúcares, grasas y sodio son saludables para el consumo

¹ John Scott-Railton *et al.* “Bitter Sweet: Supporters of Mexico’s Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links”, *The Citizen Lab*, 11 de febrero de 2017. <https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/>

humano. Los intentos de ataques contra los activistas iniciaron una semana después, el 8 de julio de 2016, y siguieron hasta mediados del mes de agosto de 2016. En este tiempo, los activistas planearon el lanzamiento de una campaña para promover ante el Congreso de la Unión el aumento de la contribución del IEPS para bebidas azucaradas a dos pesos por litro. Estos intentos de ataques cibernéticos fueron divulgados por el periódico *The New York Times*,² y retomado por la prensa mexicana, con posterioridad.³

TERCERA.- El 19 de Julio del 2017, a través de un amplio reportaje de The New York Times, se divulgaron nuevos resultados de la investigación impulsada originalmente por la Universidad de Toronto. En esta nueva revelación se acredita el espionaje ilegal y gubernamental contra un conjunto amplio de activistas, periodistas o funcionarios públicos. Desde los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, pasando por defensores de los derechos humanos y activistas contra la corrupción, lo que sumado al caso ya conocido de los impulsores del impuesto a las bebidas saborizadas, se conforma como un amplio grupo de ciudadanos que han sido blancos de ataques y espionaje.

CUARTA.- Para la Cámara es relevante la situación detallada debido que el *software* que se usó para violar el derecho a la privacidad de ciudadanos mexicanos fue el sistema *Pegasus*, que comercializa la empresa de origen israelí de tecnología de inteligencia *NSO Group*, que sólo ofrece sus servicios a gobiernos nacionales y subnacionales bajo el argumento de combatir al crimen organizado y prevenir posibles ataques terroristas. El gobierno mexicano es cliente confirmado de la empresa, como se ha demostrado en diversas publicaciones en prensa⁴ y mediante revelaciones en el portal *Wikileaks*⁵. En el informe divulgado por diversas organizaciones y medios de comunicación, se señala que México es el principal cliente a nivel mundial del software “Pegasus”, el cual se vende exclusivamente a gobiernos. NSO

² Nicole Perloth, “Invasive Spyware’s Odd Targets: Mexican Advocates of Soda Tax”, *The New York Times*, 12 de febrero de 2017, p. A1.

³ El mismo día 11 de febrero retomaron la nota *El Financiero*, *Reforma*, *La Jornada*, *Proceso*, *Sin Embargo*, *Semanario Zeta*, *Animal Político*, *Aristegui Noticias*. El día 12 hicieron lo propio *El Economista* y *Huffington Post México*. El 13 de febrero siguieron *Milenio* y *La Crónica*.

⁴ El periódico *Reforma* detalló que la adquisición de este programa informático se hizo mediante la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. en 2014 y 2015 para uso de la Procuraduría General de la República. Véase “Adquiere la PGR equipo para espiar”, *Reforma*, 12 de septiembre de 2016, p. 1.

⁵ A través de la divulgación de correos electrónicos de la empresa italiana *Hacking Team*, que se dedica también a proveer servicios de espionaje a diferentes gobiernos, fue que se pudo conocer que Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, fue quien prefirió adquirir programas de espionaje a *NSO Group* sobre *Hacking Team*. Véase <https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5455>

Group incluso ha indicado que no comercializa dichos productos con gobiernos involucrados en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero que, una vez que el software ha sido adquirido por las autoridades públicas, la compañía fabricante no tiene la posibilidad de contralar o supervisar su utilización⁶.

QUINTA.- Según trascendió en la prensa, el software Pegasus fue terminado de instalar en la PGR en Marzo de 2015, cuando la Procuradora General era Arely Gómez. Sin embargo, el dispositivo de espionaje fue adquirido durante el mandato al frente de la institución de Jesús Murillo Karam, cuando el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) era Tomás Zerón. Aunque durante la época en la que se desarrollaron las prácticas de espionaje la PGR estuvo dirigida por Arely Gómez, la responsabilidad de adquisición del software malicioso correspondió a Murillo Karam. Por tanto, resulta urgente que ambos exfuncionarios ofrezcan explicaciones, respectivamente, de los motivos de adquisición y de los formatos de operación de la mencionada aplicación de espionaje.⁷

SEXTA.- El intento de violación de las comunicaciones y la privacidad de las personas es completamente inaceptable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos delimita claramente quiénes y bajo cuáles circunstancias podrán intervenir las comunicaciones y medios electrónicos de las personas. Esto se fija claramente en el párrafo 13 del Artículo 16 Constitucional.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración (...).

El derecho a la privacidad de las personas se refuerza por diferentes tratados internacionales que México ha ratificado. Tanto el Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipulan que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio

⁶ https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/?utm_content=bufferc37e7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

⁷ http://www.milenio.com/politica/murillo-karam-pegasus-arely-gomez-pgr-malware-espia-periodistas-activistas-milenio_0_983901610.html

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

La forma, tiempo y medios de investigación mediante programas electrónicos de espionaje están claramente normados en el artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta norma fija que:

La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada, precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación a ser intervenida; su duración; el proceso que se llevará a cabo y las líneas, números o aparatos que serán intervenidos y, en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. El plazo de la intervención, incluyendo sus prórrogas, no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

La Ley Federal contra la Delincuencia organizada fija exactamente los mismos límites a las instituciones de procuración de justicia del gobierno en el Artículo 17. También las agencias de inteligencia del Estado mexicano están sujetas a controles similares: en los artículos 34, 38, 40 y 43 de la Ley de Seguridad Nacional se regula, bajo condiciones similares a las ya señaladas, la forma como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional debe actuar cuando pretenda intervenir comunicaciones.

Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con claridad que el carácter inviolable de la privacidad de las personas se extiende al ámbito de las comunicaciones personales por cualquier medio. La Segunda Sala expone mediante tesis aislada que:

Derecho a la privacidad o intimidad. Está protegido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. **En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.**⁸

Además, argumenta la Primera Sala que:

Derecho a la vida privada. Su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. [...] las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad –para el desarrollo de su autonomía y su libertad–. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, **la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos:** el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, **la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.**⁹

SEPTIMA.- Una de las bases fundamentales de cualquier sistema democrático es la garantía del derecho a disentir y criticar públicamente al gobierno. La democracia supone pluralidad y

⁸ Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Novena Época. Registro: 169700. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, mayo de 2008. Materia(s): constitucional. Tesis: 2a. LXIII/2008. Página: 229.

⁹ Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán. Novena Época. Registro: 165823. 1a. CCXIV/2009. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, Pág. 277.

diversidad de posiciones políticas, así como la protección estricta del ejercicio de la oposición o el periodismo crítico en condiciones de libertad y ausencia de hostigamiento. **El caso que nos ocupa es de extrema gravedad por cuanto compromete algunos de los pilares esenciales de cualquier estado democrático y de derecho.** Sólo las dictaduras y los estados autoritarios intervienen las comunicaciones de ciudadanos comunes o diseñan dispositivos de espionaje contra activistas, periodistas o destacados funcionarios públicos. El gobierno mexicano no tiene derecho a vigilar a ciudadanos con base en criterios estrictamente políticos; esto constituye un precedente de extrema trascendencia. Corresponde al poder legislativo fiscalizar y controlar la labor gubernamental, por lo que resulta necesario que la Cámara adopte una resulta posición de condena y exigencia de investigaciones y sanciones a los responsables.

OCTAVA.- Según el citado informe que da origen a las revelaciones en mención¹⁰, el espionaje del gobierno mexicano contra activistas, funcionarios o periodistas se caracteriza por varios elementos que, correlacionados, contribuyen a explicar las causas, motivaciones, contextos e implicaciones de los ataques. Podemos distinguir, al menos, cuatro.

1. Los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común y existen coincidencias en el texto de los mensajes recibidos por diferentes objetivos

Es posible documentar casos donde mensajes idénticos (o con variantes mínimas) fueron utilizados para atacar a dos o más objetivos. Esto sugiere la posibilidad de que **un mismo responsable haya enviado intentos de infección a diferentes personas.**

2. Existe un incremento en el número de intentos de infección durante coyunturas críticas del trabajo de los objetivos

El periodo en el que se producen los ataques e infiltraciones coincide con contextos en los que se realizan investigaciones, críticas o propuestas particularmente comprometedoras para el gobierno. Por ejemplo, a **Carmen Aristegui** y a su hijo les envían los mensajes maliciosos poco tiempo después de la revelación del escándalo de la casa blanca. **Carlos Loret de Mola** recibe los mensajes cuando el periodista comienza a denunciar las inconsistencias de la

¹⁰ https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/?utm_content=bufferc37e7&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

versión oficial sobre el suceso de Tanhuato, Michoacán. A los representantes del poder del consumidor y a los del **INSP** los espían mientras están desarrollando campañas públicas para la adopción de impuestos y medidas contra la comercialización de bebidas azucaradas. En el caso del Centro **PRODH**, el espionaje coincide con varios momentos críticos como la difusión de las conclusiones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa o la denuncia ante instancias internacionales de la tortura sexual en Atenco. En el caso del **IMCO**, el espionaje ocurre en un contexto cercano al el impulso a la Ley 3de3, que, contra la voluntad del ejecutivo y el PRI, exigía, de forma obligatoria, a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial, de interés y fiscal. En el caso de **Mexicanos contra la corrupción y la impunidad**, un reportaje elaborado en colaboración por esta organización reveló una red de funcionarios en Veracruz que entregó contratos a empresas fantasmas para el desvío de recursos públicos. La investigación implicó al entonces gobernador Javier Duarte, militante del PRI y personaje cercano al presidente Peña Nieto.

3. El gobierno federal es el actor principal común en las coyunturas críticas de los objetivos

Al contrastar las diferentes coyunturas críticas del trabajo de los periodistas y defensores de derechos humanos en los periodos de infección, surge un actor principal común: el gobierno federal.

4. El gobierno mexicano ha adquirido el malware Pegasus

En los últimos años, se han documentado diversos indicios de la adquisición de equipo de NSO Group para parte de distintas instancias del gobierno de México, tales como la **Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.**

NOVENA.- Los casos de espionaje ilegal afectan a una pluralidad de activistas, periodistas o funcionarios cuyo único nexo común es su relevancia pública en el ejercicio de la crítica al gobierno federal. Demostrar independencia y apartarse la línea oficial no puede ser acreedor de agresiones y espionaje; al menos ello no puede ocurrir en un estado democrático y de derecho. No resulta casual que ha sido en algunos de los momentos más críticos de la presente administración, en términos de corrupción o derechos humanos, cuando se han efectuado las

prácticas de espionaje contra activistas o periodistas involucrados en estos procesos. En la siguiente tabla puede encontrarse un cuadro sinóptico que relaciona todos los casos de espionaje descubiertos con su contexto y motivaciones.

DECIMA.- Como se ha señalado, entre los objetivos de este espionaje destacan los miembros del Centro Prodh, quienes sufrieron intentos de infección en el contexto de la presentación del informe final del caso Ayotzinapa por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El jueves 6 de julio, durante las audiencias públicas del 163 periodo de sesiones de la CIDH en Lima, Perú, los comisionados Esmeralda de Troitiño y James Cavallaro anunciaron que los miembros del GIEI, así como el secretario ejecutivo de la institución, “recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado *Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México*” y advirtieron que comunicarían formalmente al gobierno la situación. Los funcionarios y representantes del Estado mexicano se limitaron a asegurar que existe el compromiso de investigar.

Este hecho resulta absolutamente inaceptable dado que el GIEI coadyuvó y asesoró técnicamente en la investigación del caso Ayotzinapa en calidad de representantes diplomáticos. De confirmarse la denuncia hecha por los comisionados en la audiencia pública del 6 de julio, el gobierno federal mexicano podría haber cometido un delito internacional; por ello, la investigación inmediata resulta imprescindible.

¹¹ Elaboración propia a partir de

UNDECIMA.- No resulta razonable que ante uno de los casos de abuso gubernamental más graves del sexenio, ningún responsable haya ofrecido explicaciones. Con el objetivo de obtener una visión panorámica de la gravedad del caso de espionaje ilegal, se ofrece el siguiente cuadro sinóptico:

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con

Objetivos	Organización	Fecha	Contexto/Motivo
Alejandro Calvillo, Luis Encarnación y Simón Barquera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El Poder del Consumidor ➤ INSP 	Julio- Agosto 2016	Impulso del impuesto a las bebidas azucaradas y saborizadas
Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán	Aristegui Noticias	Enero 2015- Julio 2016	Publicación del reportaje periodístico de la “casa blanca” a finales del 2014
Carlos Loret de Mola	Televisa	2015-2016	Cuestiona en 2015 la versión oficial sobre los sucesos de Tlaxiaco, Michoacán y denuncia ejecuciones extrajudiciales
Juan Pardinas y Alexandra Zapata	Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)	2015-2016	Denuncia de la corrupción e impulso de leyes anticorrupción (3de3)
Mario Patrón, Stephanie Brower, Santiago Aguirre	Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)	Abril- Junio del 2016	Documentación y defensa de violaciones de derechos humanos, tales como la desaparición forzada de los 43, la ejecución extrajudicial de civiles por parte del ejército en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; las sobrevivientes de tortura sexual durante el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y la discusión de la Ley General contra la Tortura.
Salvador Camarena, Daniel Lizárraga	Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI)	Mayo-Junio del 2016	Denuncia de la corrupción y publicación de diversos escándalos de corrupción, entre ellos el que afectó a Javier Duarte.
Esmeralda de Troitiño y James Cavallaro	Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes	Marzo del 2016	Presentaciones de Investigación sobre el caso Ayotztinapa que contradice la verdad oficial del ejecutivo federal a finales de abril del 2016

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a comparecer con carácter urgente ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con la finalidad ofrecer explicaciones en relación a los casos de espionaje ilegal.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar, esclarecer y, en su caso, a sancionar a las autoridades responsables del espionaje ilegal.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a atender las quejas que le ha trasladado sobre caso de espionaje la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a que se coordine con la PGR para la investigación de delitos internacionales por presunto espionaje contra autoridades diplomáticas.

DIPUTADA ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de Julio del 2017.